



Fernando Jáuregui y Pedro Vega

CRÓNICA DEL ANTIFRANQUISMO

La renovación, a base de elementos democristianos, del Consejo privado de Don Juan no iba a quedarse en eso. El Conde de Barcelona estaba persuadido, desde hacía años, de la necesidad de relanzar sus «relaciones públicas», su imagen en el interior de una España que, oficialmente, le ignoraba. Así se lo había explicado el embajador en París, José María Areilza, algún tiempo antes, en dos discretos encuentros a solas mantenidos por ambos en el sur de la costa de Inglaterra y en la frontera franco-suiza. Nada extraño resultó, pues, que, al dimitir Areilza de su puesto de embajador, fuese llamado por el Conde de Barcelona para hacerse cargo de la «secretaría política» del Consejo.

Areilza sustituía en el cargo a Jesús Pabón, un catedrático insigne, antiguo miembro de la CEDA, pero escasamente dotado para la acción política. El conde de Motrico llegaba precedido de la enemiga del Régimen; al fin y al cabo, era un traidor al mismo desde que abandonó la embajada en París. Carrero Blanco difundía que el nuevo secretario político de Don Juan se había hecho masón, y Franco ordenaba espiar su teléfono. Para colmo, el controvertido Areilza se había ido ganando la enemistad del Opus Dei. Y el Opus Dei, en aquel año 1966, seguía en ascenso.

No resulta extraño, por tanto, que el nuevo secretario político se sienta incómodo ante la influencia que indudablemente ejercen sobre el Conde de Barcelona personajes como Antonio Fontán, Rafael Calvo Serer o el notario Antonio García Trevijano, que no pertenece a la Obra de monseñor Escrivá, pero que ha sido «aportado» a Villa Giralda por Calvo Serer y, de alguna manera, por Fontán, compañeros de aventura en el diario «Madrid». Trevijano, además, había logrado iniciar una cierta relación de amistad con el Príncipe Juan Carlos, siendo éste cadete en la Academia de Zaragoza y aquél notario en un pueblo cercano a la capital aragonesa. Al joven cadete le encantaban los automóviles descapotables y Trevijano resulta que tiene uno.

No serían éstos los únicos sapos que Areilza tendría que tragar: el Consejo privado, organismo prácticamente inoperante bajo la batuta de Pabón, está lleno de contradicciones. Un influyente personaje del Opus, Ramón de Sampedro, hace oír sus opiniones en voz bien alta. Otro «hombre fuerte» en él es Eduardo Gil de Santivañes, carlista y ultraconservador, quien, sin embargo, acabaría siendo una eficaz ayuda para el conde de Motrico en sus intentos de relanzamiento. En el Consejo habían entrado, no muchos meses antes que Areilza, varios democristianos, en sustitución, como antes se afirmó, de José María Gil-Robles. Junto a todos ellos figu-

(Madrid). Julián Ariza y Víctor Martínez Conde se encargaron de hablar con el conde de Motrico, al que visitaron en su casa, para pedirle un local donde poder reunirse. El propio Areilza les acompañó, en un coche de su propiedad, a visitar el lugar de la finca más apropiado para celebrar la reunión, evidentemente al aire libre. A continuación, junto con sus dos visitantes, fue a decirle al guarda que, cuando acudieron aquellos acompañados de otros, les dejase pasar sin ninguna observación.

Areilza siempre prestó su apoyo a Comisiones Obreras. Por aquellas mismas fechas, tomó contacto asimismo con la organización sindical en Barcelona, para ponerla en relación con su gente de confianza en Cataluña. A tal fin, se desplazaron a la Ciudad Condal, Nicolás Sartorius y Manuel Goicoechea. Estaban citados con el conde de Motrico en el hotel «Palace», en donde le encontraron reunido con Ignacio Villalonga, presidente del Banco Central. Les citó nuevamente, esta vez en un despacho de las Ramblas. A él acudieron Ángel Rozas, un hombre de extraordinaria pequeñez; Ángel Abad, extremadamente alto y cojo; Manuel Goicoechea, cuyo defecto era el estrabismo; y Nicolás Sartorius que actuó como introductor de sus acompañantes ante el conde de Motrico, con quien estaba Santiago Nadal. Los dos monárquicos comprendieron pronto que la extraña impresión inicial que les produjo la delegación de Comisiones Obreras quedaba sobradamente compensada por la capacidad intelectual de quienes la integran.

Al reunirse en la finca de Aravaca, los dirigentes de Comisiones Obreras persiguen tres objetivos fundamentales. El primero de ellos es hacer la definición del sindicato. Existía una gran discusión sobre si era una «organización» o un «movimiento». Hasta que a alguien se le ocurrió llamarlo movimiento organizado, a lo cual se añadía lo de «unitario, democrático, independiente y reivindicativo», cuya actuación era «abierta y no clandestina», dispuesto a vincular a todos los trabajadores que se quisieran agrupar bajo el «denominador común de la no aceptación de la actual organización sindical».

Especial interés revestía el segundo punto del orden del día, abordado al comenzar la tarde porque el primero les consumió la mañana, consistente en las relaciones con otras fuerzas políticas, y especialmente con la que estaba al frente del diario «Madrid».

Rafael Calvo Serer y Antonio García Trevijano, que acababan de hacerse cargo de la orientación del periódico, entraron en contacto con Comisiones Obreras como un elemento más de la tela de araña de relaciones que en torno al sindicato iba tejiéndose. Se mostraban dispuestos a fomentar desde «Madrid» un sindicalismo de carácter democrático y

antifranquista. Para ello, se les ocurrió la idea de ofrecer a Comisiones Obreras una página entera semanalmente para que publicasen en ella lo que quisieran, siempre con la debida cautela a fin de no desatar las iras del Régimen. De esta página se encargaba, en el diario, el periodista Jesús Carnicero, mientras que Antonio Gallifa era, en CC. OO., quien debía recibir el material que después se publicase. Pero la experiencia apenas duró un par de semanas, puesto que el Gobierno se dio cuenta de inmediato y prohibió taxativamente que siguiera haciéndose.

Por último, los reunidos acordaron convocar una jornada de acción para el 27 de octubre de aquel año.

Es muy probable que Luis Aguilé, el popular cantante de aquellos años, nacido en Cuba y afincado en Madrid, no supiera que su casa madrileña en la calle de Españolito servía entonces de centro de operaciones de los principales dirigentes de Comisiones Obreras. Durante seis años largos estuvieron haciendo reuniones, las más restringidas y clandestinas, en esta vivienda y hasta escondiendo propaganda en la leñera que allí existía.

Fue a través de su secretaria, Juana, como entraron los líderes de Comisiones Obreras en la casa de Luis Aguilé, convirtiéndola en verdadero santuario de la subversión sindical. Allí se hicieron, desde entonces, la mayor parte de las reuniones entre los dirigentes del sindicato que pertenecían al PCE y los responsables de este partido, en particular Luis Lucio Lobato. Desde allí se haría, años después, la mayor parte de las llamadas telefónicas al extranjero, cuando se iniciase la campaña internacional de solidaridad con los encartados en el sumario 1.001 por el que fueron procesados los principales dirigentes de Comisiones Obreras. Y allí se planeó la acción del 27 de octubre de 1967, en una reunión en la que estuvieron presentes Luis Lucio Lobato, Nicolás Sartorius y Vicente Llamazares.

Víctor Díaz Cardiel se había encargado de asegurar el contacto entre la dirección madrileña del PCE y los hombres del partido en el sindicato, mediante encuentros frecuentes con Marcelino Camacho. Pero tras su detención en abril de 1965, su papel fue desempeñado por un veterano militante asturiano, que ya conoció los efectos de la represión en propia carne en 1934, llamado Mario Huertas, conocido por *Luis Segundo*. Éste fue quien se encargó después de enlazar habitualmente con Julián Ariza, al estar en la cárcel Marcelino Camacho. Solían encontrarse por la zona del Retiro, paseaban por el parque durante un rato, evitando contronazos con la policía. Aunque un día, estando reunidos en la cafe-

tería «Viena», entró en tropel un grupo de miembros de la Brigada Político Social en busca de estudiantes, ya que habían tenido lugar incidentes por la zona de Moncloa.

En esta época ya empiezan a funcionar regularmente lo que se conocerá por «núcleos» del PCE en Comisiones Obreras. Se trataba de grupos integrados por los militantes del PCE en cada comisión y, aunque el más importante fuese el núcleo de la Inter, existían otros a nivel de rama. Todo ello, independientemente de las organizaciones regulares del PCE en las fábricas, en muchas de las cuales, como Standard, Casa, Marconi, Pegaso o el sector de la construcción, funcionaban comités del partido encargados de desarrollar un trabajo específico.

Aunque, de hecho, nadie se presentase en las reuniones de Comisiones Obreras como de uno u otro partido, resultaba ya evidente que, cuando unos intervenían, lo hacía por su boca tal o cual partido, en especial PCE o AST, que luego sería ORT. Los comunistas serán precisamente quienes trasladen a Comisiones Obreras la propuesta de celebrar una gran jornada de lucha a nivel nacional el 27 de octubre de 1967, una especie de ensayo de huelga general, con manifestaciones y asambleas en los centros de trabajo, desde donde se debería salir caminando hasta los sindicatos de cada lugar para hacer entrega allí de las reivindicaciones aprobadas antes en las asambleas.

La iniciativa tuvo un alcance nacional y debía ser la culminación de una semana, a lo largo de la cual se desplegaran acciones de diverso tipo, desde asambleas en los centros de trabajo hasta paros de escasa duración. Pero su preparación fue especialmente intensa en Madrid, cosa lógica, por otro lado, si se tiene en cuenta que la capital disponía entonces de la organización más importante.

Para concretar la forma de realizar la jornada, las Comisiones Obreras de Madrid celebraron una asamblea de representantes de las diferentes ramas, acudiendo a la misma unos doscientos líderes sindicales. La reunión tuvo lugar en los locales de la antigua fábrica de Medias Vilma, propiedad del abogado Antonio García Trevijano. Éste había conectado con los dirigentes del sindicato, como tantas otras personalidades de la vida política de la oposición que se movían en torno a planteamientos monárquicos o democristianos, interesados en mantener relaciones con los sectores obreros del antifranquismo.

Esta vez, la policía no logró enterarse de la convocatoria de la reunión, pero el contenido de la misma se filtró, al igual que otras veces, con

una gran perfección de detalles. Tanto es así que, cuando detienen a catorce dirigentes de Comisiones Obreras de Madrid en los días siguientes, a Julián Ariza le recordaron que sobre su mesa cayeron los trozos de un cristal, que se rompió mientras estaba presidiendo la asamblea. Pero la jornada del 27 de octubre quedó perfectamente planificada, aunque al poco tiempo detuvieron, entre otros, a Julián Ariza, Luis Hoyos, Trinidad García Vidales, Manuel Traba, Nicolás Sartorius, José Luis Martino, Víctor Martínez Conde, Antonio Gallifa y Manuel Goicoechea. La mayoría quedará en libertad poco después, pero los tres primeros pasarán varios años entre rejas.

Las detenciones en Madrid no impidieron que, tanto en la capital como en las principales ciudades del país, se llevara a cabo la jornada de acción con mayor o menor éxito. Según las evaluaciones de los convocantes, en Madrid participaron más de cien mil trabajadores, contando además con la solidaridad activa de la Universidad.

Las acciones alcanzan asimismo a Barcelona, en donde serán detenidos una buena parte de los principales líderes sindicales. Comisiones Obreras vuelve a sufrir en la capital catalana un serio revés. Entre los encarcelados se encuentran Ángel Rozas, el primero en ser arrestado cuando llegaba al lugar de la concentración, Miguel Candó, Pedro Hernández, Tomás Chicharro... El enfrentamiento entre manifestantes y policías fue especialmente virulento en Tarrasa, donde los trabajadores se hicieron fuertes junto a las vías del tren, manteniendo a raya a la Policía Armada arrojándole piedras. Por la noche, fue detenido, cuando estaba ya en su domicilio, Cipriano García.

Muy similar es lo que ocurre en otros lugares, como Bilbao, Sevilla, Asturias o Galicia.

A lo largo de los días anteriores al 27 de octubre, la prensa insistió en que se estaba en presencia de una «maniobra» del PCE que pretendería, de esta forma, conmemorar, según las versiones oficiales u oficiosas, el cincuenta aniversario de la Revolución Soviética.

Antes de la celebración de la jornada, el 23 de octubre, la policía irrumpió en una reunión a la cual asistían diecinueve personas y en la que se pretendía reestructurar la Inter madrileña, a la vista de las detenciones efectuadas en los días anteriores. La reunión se celebraba en una vivienda situada en la sexta planta del número 57 de la Gran Vía, propiedad de José María de Areilza, que hubo de prestar declaración posteriormente en la instrucción de diligencias en el sumario abierto con este motivo. Fueron detenidos, entre otros, Víctor Martínez Conde, el sacerdote obrero Carlos Jiménez de Parga y Salvador Ruiz Soler, hermano del bailarín Antonio y militante del PCE.

Apenas iniciado el mes de noviembre, el Tribunal Supremo dictará una sentencia decisiva para el futuro de este nuevo movimiento obrero al declarar a Comisiones Obreras no sólo ilícitas sino también subversivas. Si quedaba algún resquicio por el que escapar a la represión, la más alta instancia de la justicia franquista cerraba cualquier salida. Aprovechando las fiestas navideñas de diciembre, se celebra una nueva reunión nacional para estudiar la situación en que se encuentra Comisiones Obreras. Aun adobándolo de cierto triunfalismo, se constata que los principales dirigentes están encarcelados: los madrileños Marcelino Camacho, Julián Ariza, Luis Hoyos y Trinidad García Vidales; los asturianos Gerardo Iglesias, Manuel Otones, José Celestino González y Martín Fraga; los catalanes José Luis López Bulla, Ángel Rozas, Andrés Martínez Ojeda, Francisco Roda Baños, Vicente Faus, Adonio González, Eduardo López Aguilar, Félix Blázquez, Sánchez Martín y Jerónimo Vázquez; los sevillanos Enrique Bernal y Jaime Montes; y los vascos Francisco Sánchez Corzázar, David Morín y José María Ibarrola.

Para Comisiones Obreras empezaba una nueva etapa, en la que las estructuras clandestinas del sindicato preservarán más la seguridad. Es también a partir de ese momento cuando se alejan definitivamente de CC. OO. algunas gentes que aún quedan procedentes del falangismo. En Comisiones Obreras permanecerán, prácticamente solos, comunistas, algunos socialistas independientes y los militantes cristianos nucleados en torno a AST.

ñola le muestra la declaración que hizo ante la francesa, al ser detenido en París.

—«Voilà, un caso de colaboración policial hispano-gala», comentaría, años después.

Los esfuerzos de la organización universitaria comunista —el PCE cuenta, en 1968 y pese a las escisiones, con una considerable fuerza en la Universidad de Madrid, fuerza que ha ido incrementándose bajo la dirección de Lourdes Ortiz, primero, y Pilar Brabo, después, hasta tener unos 400 militantes— y del FLP —que ya lleva en sí el germen de la autodestrucción— por hacer un «mayo del 68 a la española» fracasan. Una «comuna» en la Facultad de Filosofía, en la que los «pro-chinos» actúan de elementos provocadores de los «grises», acaba con una violenta irrupción policial y con más de 200 detenidos. Los intentos de boicot a los exámenes de «Formación Política», asignatura «maría» que imparten profesores falangistas (en alguna ocasión descaradamente ayudados por estudiantes de ideología ultraderechista), constituyen un relativo fracaso. Aquel verano se aprueba la ley de Bandidaje y Terrorismo.

El catastrófico resultado de la sexta RCP había significado, además, un retroceso importante para el SDEUM. De manera especial, en las escuelas técnicas, donde ya no volvería la tradición de lucha implantada, no muchos cursos antes, por los Daniel Lacalle, Julián Campo, Javier Solana, César Ramírez, Daniel Iríbar o Eugenio Triana, aquel estudiante del SEU «repechado» para el PCE por Iríbar. Ambos hacían, junto con Manuel Portela y Manuel Mínguez, el boletín «Ciencia, Técnica y Revolución», un intento, junto con la Asociación Democrática de Técnicos del PCE por penetrar en los medios no específicamente humanísticos. La Asociación, que llegó a organizar asambleas clandestinas de hasta 500 personas en el Hogar del Empleado, derivó en una coordinadora interpartidaria en la que, algunos años después, estarían Luis Solana, Lacalle y el propio Triana. Pero las funciones de esta coordinadora trascendían ya los fines puramente técnicos.

Algunos intentos por revitalizar la vida estudiantil, como la llegada a Madrid de Jean Jacques Servan Schreiber, el célebre autor de «El Desafío Americano» (viaje que fue financiado por el notario Antonio García Trevijano, primo del decano de la Facultad de Económicas del mismo nombre), no pasaron de meros actos coyunturales.

Para colmo, el Frente de Liberación Popular, tras tres etapas y casi diez años de existencia más o menos regular, daba sus últimos coletazos, enfrentadas sus tendencias cristianas, tercermundistas y la que ya se apuntaba como trotskista. Aún habría de aguardarse varios meses para

conocer el desenlace del «felipe», auténtico co-protagonista de la vida universitaria de aquellos años.

En octubre, el inicio del curso 1968-69 conoce nuevas revueltas. Algunos estudiantes, como José María Mohedano, son expulsados de la Universidad; pese a ello, continúan asistiendo a la Facultad y participando en asambleas. La entrada de la policía en una de ellas, celebrada en el «hall» de la Facultad de Derecho, origina un considerable tumulto, en medio del cual, un estudiante, Abilio Villena, entonces próximo al FLP y luego militante en la por entonces aún no nacida Organización Revolucionaria de Trabajadores, quema públicamente un retrato de Franco.

El impacto de la acción es tremendo; se suceden las «vendettas» a cargo de miembros de Defensa Universitaria (en Derecho destaca la figura de Javier Saavedra, quien, con el transcurso de los años, se convertiría en militante liberal y hasta abogado de Saddam Hussein). Se responsabiliza de todos los incidentes a Mohedano, a Jaime Pastor y a Román Oria, que deben pasar a una rigurosa clandestinidad. Los dos últimos huyen a París.

José María Mohedano, al que su madre esconde no pocos panfletos en un cajón camuflado en una mesa camilla, decide permanecer en España, viviendo una vida de semi-normalidad. Hasta que un día, cuando viajaba en autobús para asistir a un partido de baloncesto, puede leer, en el «Nuevo Diario» que sostenía su vecino de asiento, que existe una orden militar de busca y captura en su contra, así como de Oria y Pastor.

La situación es grave, y Mohedano decide presentarse ante las autoridades castrenses, rodeándose, eso sí, de cierta publicidad protectora. Su comparecencia aparece en la portada del liberal diario «Madrid» —al que ya quedan pocos meses de vida— y la sentencia será relativamente benigna. José María Mohedano es encarcelado hasta el 20 de enero de 1969. Cuando, ese día, sale de Carabanchel, le comunican que su correligionario Enrique Ruano acaba de sufrir una extraña muerte, estando en manos de la policía.

Los corrillos, tras el enlace Echevarría-Sahuquillo, tienen como tema de comentario «qué hacer», cuál debe ser la postura a adoptar. ¿Qué harán los Satrústegui, Ridruejo, Tierno, Ruiz-Giménez, Areilza, los comunistas, los socialistas...? Hay quien llega a predecir una acción conjunta de toda la oposición en contra de la designación del hombre a quien todos, salvo los muy pocos que le conocen más estrechamente, consideran el heredero e intérprete fiel del franquismo.

Las reuniones se suceden en los días siguientes, proliferan los comunicados y panfletos que juzgan con dureza la figura del sucesor. Pero no habrá posición ni acción conjunta.

En la tarde del 18 de julio, en los jardines de La Granja, en Segovia, la clase afecta al Régimen y el escaso cuerpo diplomático que asiste a la fiesta conmemorativa del Alzamiento Nacional, comentan preocupados la noticia que esa misma mañana se había hecho oficial.

Los más se muestran partidarios de la sucesión en la persona de Juan Carlos. Pero casi nadie conoce bien al Príncipe. Se asegura en algún corrillo que, tras una cena mano a mano con él, José Antonio Girón ha quedado encantado con la personalidad de quien ahora es llamado a suceder al anciano Caudillo. Y este entusiasmo de Girón es interpretado como un mal augurio por la mayoría de quienes, aun dentro del Régimen, pretenden una evolución que, al menos, cambie algo para que todo siga igual.

La ceremonia sucesoria tendrá lugar el 22 de julio. Una buena parte de la clase política, y no pocos españoles, han partido ya de vacaciones. El formalista acto no induce precisamente al aliento. Tiene un carácter continuista, de aceptación taxativa de los Principios Fundamentales del Movimiento.

Desde Estoril, el Conde de Barcelona ha autorizado la difusión de un comunicado redactado por José María de Areilza, en el que hay quienes sostienen que tuvo bastante que ver el abogado Antonio García Treviña que en esos momentos se encontraría también en la localidad portuguesa.

El párrafo inicial dice así: «En 1947, al hacerse público el texto de la llamada Ley de Sucesión, expresé mis reservas y salvedades sobre el contenido de esa ordenación legal en lo que tenía de contraria a la tradición histórica de España. Aquellas previsiones se han visto confirmadas ahora, cuando, al cabo de veinte años, se anuncia la aplicación de esa ley. Para llevar a cabo esa operación no se ha contado conmigo, ni con la voluntad libremente manifestada del pueblo español. Soy, pues, un espectador de las decisiones que se hayan de tomar en la materia, y ninguna responsabilidad me cabe en esta instauración.»

El despertar de los profesionales

La inventada protesta del fiscal Chamorro y el juez Auger. Lora Tamayo enciende la mecha. Ruiz-Giménez y Gil-Robles, derrotados. García Trevijano convence a Enrique Tierno. Fernando Castelló, una cuña en la Asociación de la Prensa. El boletín de Andreu Claret.

Crecientemente desligados de cuanto ocurre en la universidad —y, desde luego, sin sufrir la influencia de la «sopa de letras» que se vive en los «campus»—, los movimientos profesionales estallan, como arietes de lucha antifranquista, a finales de la década de los sesenta; son herederos directos de los movimientos de contestación que, desde hace tiempo, protagonizan artistas e intelectuales, en los que el PCE ha tenido un protagonismo decisivo. El Congreso de la Abogacía de León, en 1970, había hecho que todos los ojos se volvieran hacia los colegios de abogados, donde, desde hacía años, latía el inconformismo.

Pero, con ser el más llamativo, el de los abogados no era el único mundo profesional en abierta hostilidad con el Régimen: arquitectos, economistas y, sobre todo, asociaciones de la Prensa y colegios de Doctores y Licenciados albergan sectores importantes de profesionales jóvenes que se plantean, como primera meta, la lucha contra la dictadura. Incluso sectores tan caros al Régimen como jueces y militares iban a conocer en su seno minoritarios movimientos disidentes: en el primer caso, a través de Justicia Democrática; en el segundo, vía Unión Militar Democrática. Como tantas otras iniciativas antifranquistas, ambas organizaciones tuvieron su embrión en Barcelona, para extenderse después a Madrid y al resto del Estado.

aquellos momentos, nueva savia (Pilar Lucendo, Paloma Portela, Ana Amorós, Ludolfo Paramio, Joaquín Leguina, Magdalena Pérez...) comienza a participar en las actividades del Colegio en Madrid, así como a contactar con otros colegios de Doctores y Licenciados de España. Pronto comenzarían a trabajar en lo que, a propuesta del PCE, se llamaría «la alternativa democrática para la enseñanza».

De todos los colegios profesionales, sin duda el que tuvo una mayor proyección política y social fue el de abogados de Madrid. De alguna forma, vino a constituir, desde principios de los años setenta, una especie de parlamento en miniatura, dado que en él estaban representadas todas las fuerzas políticas. Fue allí, además, donde primero se formaron plataformas unitarias, a partir de la constitución de candidaturas para las elecciones de la Junta.

De todas formas, las buenas relaciones que generalmente existieron entre abogados de distintas tendencias pasaron por momentos difíciles a la hora de formar candidaturas unitarias de la oposición democrática. Aquellas buenas relaciones estaban muy determinadas por la defensa conjunta y común de represaliados políticos que eran procesados por el Tribunal de Orden Público. Sin embargo, cuando se trataba de actuar políticamente, las diferencias afloraban, a veces incluso con signos evidentes de sectarismo por uno u otro lado del espectro de la oposición democrática.

Así, cuando se presentó la candidatura de Joaquín Ruiz-Giménez, se produjo un incidente al anunciar Jesús García Varela, en el momento en que se estaba negociando la lista, que tanto él como Antonio Rato y José María Pariente estaban allí en calidad de representantes del Partido Comunista de España. Aquello indignó especialmente a Joaquín Satrústegui, que les acusó de totalitarios. Para evitar la ruptura de las negociaciones, los comunistas optaron entonces por participar en la elaboración del programa de la candidatura unitaria, pero permanecieron al margen de la misma, en donde inicialmente tendría que haber sido incluido Antonio Rato.

En el Colegio de Abogados de Madrid se movió especialmente Pablo Castellano, cuyo papel fue decisivo en la preparación de la batalla del año 1971. El objetivo, en aquella ocasión, era exclusivamente desbancar al decano Del Valle. Una miniplataforma unitaria estuvo funcionando de cara a organizar la campaña. En ella participaron, además de Castellano, Antonio García Trevijano, Gregorio Peces-Barba, José María Pariente..., siendo además bastante frecuentes las reuniones en el despacho de José María Gil-Robles, aunque habitualmente era su hijo quien asis-

organizar un verdadero escándalo. Simón Sánchez Montero y Jesús Chamorro habían llegado a garantizar a Marcial Fernández Montes el apoyo del PCE de forma incondicional, pero los letrados comunistas se mostraron en algún momento decididos a concurrir con una candidatura propia. Al final, Marcial Fernández Montes no llegó a presentarse.

Por un instante, todo parecía indicar que los únicos candidatos serían Joaquín Ruiz-Giménez y Antonio Pedrol Rius. Pero en ese momento entró en liza la candidatura de Enrique Tierno que, sin consultar a nadie, decidió presentarse unilateralmente. La explicación estaba en la aparición de José María Gil-Robles en la candidatura, al cual había propuesto inexplicablemente Pablo Castellano, empeñado ya en aquellos tiempos en un acercamiento entre la Democracia Cristiana y el PSOE. Cuando Tierno Galván entró en liza, Antonio García Trevijano fue el encargado de actuar como mediador para conseguir que se retirase. Pero aquél se resistió.

—«Renuncio si se retira Gil-Robles», insistía, tozudo, el viejo profesor.

García Trevijano trató de convencerle de que la actitud inteligente era colocar a alguno de sus seguidores del PSI en la candidatura, llegando a ofrecerle el puesto de tesorero para Raúl Morodo.

En la candidatura de la oposición tampoco entraba Antonio Rato, ni ningún otro letrado comunista. Ello dio lugar a un serio enfrentamiento verbal entre los representantes del PCE en el Colegio de Abogados y Pablo Castellano.

Al final, cuando las elecciones estaban a punto de celebrarse, se produjo el veto gubernamental a la mayor parte de los candidatos de la oposición, con lo que el único candidato en liza era Antonio Pedrol Rius, pero éste tuvo el gesto de retirarse también, con lo que las elecciones quedaron aplazadas. Las elecciones no se celebraron hasta 1973, contando Pedrol con el apoyo oficial frente a Joaquín Ruiz-Giménez. El PCE no intervino para nada en la preparación de la candidatura de este último, limitándose a apoyarla. La votación se produjo precisamente la víspera del atentado contra el almirante Carrero Blanco y de que empezase ante el TOP la vista del sumario 1.001. El escrutinio finalizó, con el esperado triunfo de Pedrol, a altas horas de la madrugada, con apenas tiempo para que Joaquín Ruiz-Giménez pudiera vestirse la toga y acudir a defender a Marcelino Camacho. Cuando empezó el escrutinio, José María Gil-Robles pidió a los representantes del PCE que enviasen a sus militantes para ayudar, pero aquéllos se negaron, aduciendo que no habían participado desde el principio y no lo iban a hacer entonces.

Primeros pasos de la Junta Democrática

García Trevijano entra en acción. La sorpresa del coronel Blanco. Moi, ausi, ¡accuse. El exilio semidorado de Calvo Serer. Un encuentro entre Carrillo y Areilza. Rojas Marcos negocia con Isidoro. Tierno «olvida» a Morodo. Un pacto democristianos-socialistas. «Felipe es aún peor que Llopis.»

La muerte de Carrero Blanco había acelerado las cosas. En la mente de todos, incluido el flamante presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, estaba que en 1974 no se podría volver a gobernar como en 1973. La impotencia del Régimen ante el tremendo agujero en la calle de Claudio Coello no se subsanaba, como luego se demostraría, con las 325 detenciones políticas practicadas entre enero y abril.

El abogado Antonio García Trevijano prefirió no esperar a ver en qué consistían las promesas liberalizadoras del sustituto de Carrero, plasmadas en un discurso el 12 de febrero que bien pronto sería desmentido por los hechos: las reacciones suscitadas por la homilía del obispo de Bilbao, monseñor Añoberos, y la ejecución, mediante el sistema de garrote vil, del joven anarquista Salvador Puig Antich —acompañado en su trágico viaje por el polaco Heinz Chenz—, mostraron a las claras que el «espíritu del 12 de febrero» iba a quedar en nada. Para colmo, el estallido de los casos Reace y Sofico constituyó una muestra más de que el Gobierno Arias tampoco era capaz de regenerar moralmente el estado de cosas dejado por su antecesor.

No es que la oposición, en todo caso, hubiese puesto grandes esperanzas en el «espíritu del 12 de febrero» y menos aún en la propuesta de asociaciones políticas lanzada con tal motivo. El año comienza con una oposición al franquismo claramente desorientada, desunida, en pleno

proceso de reflexión interna. La voladura del automóvil de Carrero, protagonizada por un sector de ETA, desconcierta a todos. Lo mismo que Arias, la oposición comprende que han llegado nuevos tiempos, que son necesarios nuevos esquemas de actuación. Que hay que unirse si se quiere derrocar un Régimen que da vueltas sobre sí mismo y al que episodios como los ataques de José Antonio Girón o Antonio María de Oriol al «espíritu del 12 de febrero» hacen meditar sobre la conveniencia de renunciar a cualquier tipo de apertura.

El abogado Antonio García Trevijano nunca creyó en la apertura. Desde una posición aislada y un tanto individualista, había venido pregonando desde hacía años la conveniencia de una plataforma en la que cupiesen cuantos se oponían al Régimen y pretendían traer una democracia a España. Era un personaje atípico: se proclamaba republicano, pero luchaba por la solución legitimista encarnada en Don Juan de Borbón. Era un empresario, pero en su despacho se celebraron no pocas reuniones de Comisiones Obreras. Desde su feroz personalismo, iba a ser el motor del colectivo que dio en llamarse Junta Democrática de España.

¿Quién era, en realidad, aquel García Trevijano que, en el mismo mes de enero de 1974, comenzaba sus contactos para tratar de unir a toda la oposición? Tenía partidarios y detractores que podían defenderle o atacarle hasta el límite. Su actuación como abogado del desaparecido diario «Madrid» había sido, sucesivamente, elogiada y vituperada —él mismo confesaría haber provocado el cierre del periódico con el serial «Lucha por el poder en el diario "Madrid"». Sus contactos con la oposición guineana, a la hora de dotar a la ex colonia de una Constitución, habían sido calificados de «corruptos» y de «idealistas», según quien lanzase el calificativo. Ninguna de sus iniciativas pasaba ya inadvertida y cuando, en 1968, financió el viaje a España del radical francés Jean Jacques Servan Schreiber, entonces autor de moda gracias a «El desafío americano», los medios más conservadores —entre ellos, Luis María Ansón, desde «ABC»— le acusaron de pretender traer conflictos a la Universidad.

El director general de Seguridad, coronel Eduardo Blanco, le confesó que la Brigada Político Social le consideraba «un hombre del Kremlin».

—«Usted es peligroso para el Régimen, pero no para mí», le había dicho Blanco, durante un almuerzo que ambos mantuvieron con Luis Valls Taberner.

Trevijano había pedido al banquero que montara el encuentro con el director general de Seguridad: trataba de pedirle la libertad de José Escobedo, empleado de su bufete, quien, actuando por órdenes de Trevijano, había facilitado la celebración de una reunión clandestina de CC. OO. en

los locales de «Medias Vilma», empresa de la que era administrador. Escobedo llevaba ya dos días en la DGS y Trevijano desconocía hasta dónde podría haber llegado en sus declaraciones durante los interrogatorios. Por ello abordó inmediatamente el asunto con el coronel Blanco.

—«Usted, coronel, está esperando una llamada de suma trascendencia para el Estado», le dijo Trevijano, en un momento en que ambos estaban a solas.

Don Juan de Borbón había telefoneado a Trevijano aquella misma mañana, para comunicarle que Franco había sufrido una lipotimia durante una cacería celebrada el día anterior en Cazorla. Trevijano decidió jugar a fondo con aquella información. Blanco picó el anzuelo: efectivamente esperaba noticias sobre la salud del Jefe del Estado, que, ya en aquellos meses de 1968, inspiraba cierta inquietud a sus seguidores.

—«Efectivamente, espero una llamada. Pero se trata de un asunto confidencial, del que dudo que esté usted enterado», dijo el abogado.

—«¿No será, por casualidad, algo relacionado con el tema Cazorla?»

Blanco, un hombre con fama de impasible, quedó descompuesto.

—«¿Cómo sabe usted eso? Usted y yo tenemos que hablar. ¿Por qué no me acompaña en mi coche y charlamos en mi despacho?»

Era la primera vez que Antonio García Trevijano visitaba las dependencias de la Puerta del Sol. Y era en calidad de huésped de honor, invitado nada menos que por el propio coronel Eduardo Blanco. Una vez allí, aprovechó para pedirle la libertad de José Escobedo, «un pobre chico que ni siquiera sabe en qué se ha visto envuelto». No sólo lograría la inmediata liberación de su secretario, sino que, además, Trevijano iniciaba en aquellos momentos una relación de amistad con el poderoso director general de Seguridad, a quien confesó que había sido el Conde de Barcelona quien le había proporcionado la información sobre la lipotimia sufrida por Franco, asunto que, naturalmente, fue celosamente escamoteado a la opinión pública. Blanco había quedado muy impresionado ante las estrechas relaciones entre aquel abogado y el padre del hombre que, según se rumoreaba entonces, pronto podría ser oficialmente designado para sustituir, «cuando se cumpliesen las previsiones sucesorias», al Generalísimo.

En realidad, Trevijano conocía al Conde de Barcelona desde mediados de los años cincuenta. Siendo un joven profesor adjunto en la Universidad de Granada, mantiene allí una relación frecuente con el catedrático de Latín y ex preceptor del Príncipe, Antonio Fontán. Éste presenta al joven adjunto, a su vez, a Rafael Calvo Serer, un hombre que albergaba la utópica idea de destruir la dictadura desde dentro, de acuerdo con Franco. Y es Calvo Serer quien introduce a Trevijano en Estoril.

No muchos años después, Trevijano, ya joven notario en un pueblo cercano a Zaragoza, se granjea la amistad del Príncipe Juan Carlos, a la sazón estudiante en la Academia militar. La relación entre ambos comienza cuando el jovencísimo cadete admira un espectacular deportivo «Pegaso» que el reciente notario ha adquirido; Trevijano, a quien el Príncipe no conoce, le invita a conducirlo. Después ambos saldrían juntos, ocasionalmente, con chicas zaragozanas. El Príncipe jamás habló de política con su amigo, y tardaría tres meses en saber que Antonio, *Tono*, era un visitante asiduo de «Villa Giralda».

Sería a través de su relación con Calvo Serer y Fontán como García Trevijano llegaría hasta el diario «Madrid». El vespertino precisaba una inversión en maquinaria cercana a los trescientos millones de pesetas. Calvo, conociendo que el bufete y la notaría de Trevijano le relacionaban con gentes adineradas, y pensando ya en una apertura del diario hacia otras posiciones políticas ajenas al franquismo, le propone hacerse con el periódico fundado por Juan Pujol. La operación, que cuenta con el visto bueno del accionista principal, Luis Valls, está a punto de concretarse: un almuerzo en el restaurante «Lhardy», de Madrid, reúne a los antiguos propietarios con Trevijano. Aquéllos le «examinan» ideológicamente; no se trata tan sólo de que pueda desembolsar los 68 millones a que asciende la venta de las acciones; también es preciso asegurarse de que el vespertino no caiga en manos heterodoxas. Corre el año 1966, y las cosas están para pocas bromas. Todo va bien durante la comida: Trevijano responde correctamente al examen de sus encuestadores. Hasta que, a los postres, Alfredo Jiménez Millas le pregunta qué piensa del 18 de julio.

—«¿De qué año?», responde Trevijano, que estaba pensando en otra cosa.

Allí concluyeron sus posibilidades de hacerse con el diario *Madrid*, aunque los avatares posteriores le convirtieran en asesor de la empresa, una vez que Valls accedió al nombramiento de Calvo Serer como presidente del Consejo de Administración del periódico, sustituyendo a Jiménez Millas.

A partir de aquel momento, el diario «Madrid» iba a pasar por avatares bien conocidos. Durante un almuerzo, el ministro de Información, Manuel Fraga, llegó a amenazar con «cerrar el periódico un día sí y otro no» si Trevijano se hacía con el control del mismo.

—«Me es indiferente, porque, con el dinero que recibo de Mao Tse-tung, podría aguantar el tiempo que fuese necesario», replicó, muy serio, Trevijano, desconcertando al irascible ministro.

No sería Fraga, sin embargo, quien cerrase el diario, pese a haber propiciado la suspensión de su publicación durante cuatro meses. Fue Alfredo Sánchez Bella, titular de Información y Turismo desde la «crisis de Gobierno Matesa», quien, el 25 de noviembre de 1971, decretó el cierre definitivo. Para entonces, Calvo Serer había ya decidido emprender un exilio voluntario y precautorio en París, donde publica, pocos días antes de la muerte del «Madrid», un artículo titulado «Moi, aussi, j'accuse», en «Le Monde», que provoca una auténtica conmoción en El Pardo. A partir de aquel momento, el catedrático del Opus Dei pasa a engrosar la nómina de traidores oficiales.

Calvo vive en París un exilio relativamente dorado, parcialmente financiado por Trevijano. Allí publica sus dos primeros volúmenes de «España, desde 1939», titulados, respectivamente, «Franco frente al Rey» y «La dictadura de los franquistas». Allí continúa una labor de hostigamiento, centrada básicamente en la figura del vicepresidente (y luego presidente) Carrero Blanco. Viaja a México, a Estados Unidos, siempre con un mismo tema en la agenda: Carrero significa el principio del hundimiento para España, Carrero es el principal responsable de cuanto ocurre con el Sahara, de cuanto sucedió con Guinea... Hasta que, un día, le telefona su sobrino José María Calvo:

—«Rafael, te has quedado en el paro. Acaban de matar a Carrero.»

Lógicamente, nadie mejor que Calvo Serer para completar el «ala derecha» de la plataforma democrática con que García Trevijano soñaba desde hacía años, y en la que empieza a trabajar efectivamente a raíz del asesinato del presidente del Gobierno.

Sin embargo, no sería Calvo el primer contactado. Fue José María Lasarte, ligado al Partido Nacionalista Vasco y con quien Trevijano mantenía relaciones profesionales desde hacía años. Le explicó que la estrategia de la unidad de la oposición debía hacerse comenzando por la periferia, no a partir de las «familias políticas» de Madrid; le esbozó un programa mínimo, consistente en someter a referéndum la forma del Estado, y también si España debía configurarse como un Régimen presidencialista. De acuerdo con el mini-programa que Trevijano esbozó a Lasarte, sería necesaria la formación de un Gobierno provisional, al menos durante un año, hasta la convocatoria de elecciones libres. Igualmente, habría que resucitar los estatutos de autonomía vasco y catalán.

Lasarte consultó a Juan Ajuriaguerra, máximo dirigente del PNV en el interior, quien dio su acuerdo, en principio, para continuar las conversaciones.

La segunda persona contactada fue Josep Andreu i Abelló, aún ligado

a Esquerra Republicana de Catalunya y figura eminente de la Asamblea de Cataluña. El veterano Andreu se entusiasma con la idea y asegura que las instancias unitarias catalanas verán el asunto con la misma nitidez que él; una aseveración que el tiempo no confirmaría, pues los catalanes se mantuvieron finalmente apartados de las plataformas de oposición estatales.

Creyendo contar ya con la aquiescencia de vascos y catalanes, Trevijano se traslada a París, donde hace partícipe de la marcha de sus gestiones a su viejo amigo Calvo Serer. Éste ve con buenos ojos el proyecto. Pero pone una condición: él no se sentará junto a los comunistas, no quiere tener nada que ver con ellos.

Los contactos de Trevijano con el PCE habían comenzado tiempo antes, a través del apoyo prestado a diversos dirigentes de Comisiones Obreras, como los líderes de la construcción Tranquilino Sánchez o Trinidad García Vidales. A este último llegó a emplearle en una constructora de su propiedad, estableciéndose, desde entonces, relaciones muy peculiares entre ambos, hasta el punto que Trevijano trataba de impulsar movimientos reivindicativos en su propia empresa, montando, para ello, exigencias ficticias con la complicidad de García Vidales.

Fue a través de CC. OO. como llegó a conocer a Simón Sánchez Montero y Armando López Salinas. Con ellos visitaría por primera vez a Santiago Carrillo en París.

El secretario general del PCE disfrutaba entonces de una etapa de gran popularidad, y estaba a punto de abandonar la clandestinidad parisiense que le imponía —ironías de la vida— usar el falso nombre de *Giscard*. Fue, precisamente, la subida al poder de Valéry Giscard d'Estaing, quien inmediatamente decretó medidas liberalizadoras en materia de extranjería y asilo, lo que posibilitó al «otro» *Giscard* recuperar su verdadero nombre: Santiago Carrillo Solares. Un hombre que inmediatamente acudió al Consulado español para obtener un pasaporte; pretensión que, naturalmente, le fue denegada.

Desde hacía varios años, Carrillo contactaba regularmente con los más variados sectores sociales y políticos españoles. En 1969 se entrevistó, por primera vez, con José María de Areilza, quien aún no había dejado la secretaría del Consejo Privado de Don Juan. El conde de Motrico trataba de tantear el estado de las relaciones entre el PCE y Moscú.

—«Primero dígame qué tal son sus relaciones con Washington», respondió el dirigente comunista.

Desde aquel primer encuentro en la alcaldía de Aubervilliers, Areilza y Carrillo mantendrán un contacto regular; el conde de Motrico está preocupado por garantizar una salida pacífica ante un restauracionismo

monárquico, y Carrillo trata de lograr garantías de legalización para su partido, cosa que ve muy difícil con la solución sucesoria impuesta por el franquismo. Desde el primer momento, el secretario general del PCE asegura a su interlocutor que su partido no haría condición «sine qua non» del restablecimiento de la República. El astuto dirigente comunista halaga, al tiempo, el ego de Areilza.

—«Usted podría ser el nuevo Niceto Alcalá Zamora», le dijo.

La misma táctica emplearía con Trevijano, a quien en alguna ocasión llegó a sugerir veladamente que el PCE apoyaría sus ambiciones de convertirse en presidente de una futura República.

El entendimiento Trevijano-Carrillo es inmediato; y eso que el abogado no habla, inicialmente, de la plataforma unitaria que trata de montar. Carrillo sigue preocupado por el futuro.

—«Los comunistas estamos hartos de recibir bofetadas. O encontramos una salida política con la burguesía, o tendremos que prepararnos para no ir como reses al matadero.»

Casi simultáneamente es contactado Alejandro Rojas Marcos, un sevillano que es el alma de un grupo llamado Alianza Socialista Andaluza, embrión de lo que más tarde será Partido Socialista de Andalucía y luego Partido Andalucista. Era un hombre perteneciente a una adinerada familia andaluza que, a través de un reducido núcleo de profesionales, se había presentado a concejal por Sevilla en las elecciones municipales de 1966; eran momentos en los que el «entrismo», para derribar el Régimen, estaba mal visto entre socialistas y demócratacristianos, pero no tanto por los comunistas, que presentaron una candidatura de Comisiones Obreras en aquellas elecciones por la capital hispalense, encabezada por Francisco León Temblador.

La «aventura municipal» de Rojas acabaría con un procesamiento por propaganda ilegal, del que sale absuelto, y con su dimisión del cargo de concejal. Un posterior procesamiento, por las mismas razones, le supondría una condena de dos años de prisión que, al ser recurrida, se convirtieron en tres años de destierro. Corría el año 1972, y Rojas no volvería a pisar Sevilla, su ciudad natal, hasta después de la muerte del dictador.

Por aquel entonces, en una huerta de Mairena del Alcor, se crea la Alianza Socialista Andaluza, con el propio Rojas, Luis Uruñuela, Ángel Tarancón, Juan Carlos Aguilar, Rafael Illescas, Fermín Rodríguez Sañudo y Guillermo Jiménez. Pocas semanas después, Rojas Marcos llevaría los estatutos de ASA a su antiguo compañero de la Facultad de Derecho, Felipe González. Éste se limita a hojear el texto que le muestra Rojas; luego le dice fríamente: «Ah, pero, ¿vosotros sois socialistas?» Ahí se per-

dió una nueva oportunidad de aproximación entre ambos personajes, tan cercanos y tan distantes por múltiples razones.

Rojas acepta de inmediato la propuesta que le hace Trevijano, no sin antes preguntar si el PSOE, partido con el que ASA se encuentra en la Mesa Democrática Andaluza, estará también en el proyecto; es una de sus viejas obsesiones, derivada de una relación de competitividad con González. Se le dice que el PSOE aún no ha sido tocado.

La presencia en la capital francesa de Andreu i Abelló, de Rojas Marcos y de Trevijano, en marzo, es aprovechada por este último para montar una primera reunión informal de lo que meses más tarde se conocería como Junta Democrática. Para llegar a este primer encuentro «plenario» había que vencer primero un obstáculo: la negativa de Calvo Serer a encontrarse con Carrillo.

A través del empresario Teodulfo Lagunero, enlace del secretario general del PCE con los mundos que a él le resultaban inaccesibles, Carrillo había intentado varias veces encontrarse con el ex presidente del ya dinamitado «Madrid». Pero el profesor del Opus Dei había rechazado continuamente esta invitación.

Trevijano decidió acabar de golpe con este inconveniente; invitó a Calvo Serer a mantener una reunión «con varios amigos, que están en el proyecto». El encuentro debía celebrarse en el propio hotel „Lotti“, lugar de residencia de Calvo Serer y donde tantas sesiones de la Junta Democrática debían celebrarse en el futuro. Evidentemente, entre los «varios amigos» se encontraba un Carrillo sonriente, que tendía una mano amistosa a Calvo.

Hablaron como si se conociesen de toda la vida. Calvo Serer, ganado por el encanto que supo desplegar Carrillo, llegaría a afirmar que «el Opus y el PCE tienen muchas cosas en común: la renuncia a tantas cosas, el sentido de la autodisciplina...». Andreu, Rojas Marcos y Trevijano asistían divertidos a la escena. Calvo impuso secreto total.

—«Que nadie llegue a enterarse de que estoy en tratos con el PCE.»

Para aumentar el clima de conspiración, Trevijano propone un sistema de comunicación clandestina: en adelante, en llamadas telefónicas y escritos, Carrillo sería conocido por la letra «A». Calvo recibió la letra «B», Andreu la «C», Trevijano se atribuyó la «D», Rojas Marcos la «E»... El sistema no llegaría a emplearse jamás.

De regreso a Madrid, Trevijano acelera las cosas: en un solo día se entrevista con José María Gil-Robles, Joaquín Ruiz-Giménez, Enrique Tierno y Pablo Castellano. El viejo líder de la CEDA, aun mostrándose de acuerdo en algunos puntos —como la restauración de los estatutos

monárquico, y Carrillo trata de lograr garantías de legalización para su partido, cosa que ve muy difícil con la solución sucesoria impuesta por el franquismo. Desde el primer momento, el secretario general del PCE asegura a su interlocutor que su partido no haría condición «sine qua non» del restablecimiento de la República. El astuto dirigente comunista halaga, al tiempo, el ego de Areilza.

—«Usted podría ser el nuevo Niceto Alcalá Zamora», le dijo.

La misma táctica emplearía con Trevijano, a quien en alguna ocasión llegó a sugerir veladamente que el PCE apoyaría sus ambiciones de convertirse en presidente de una futura República.

El entendimiento Trevijano-Carrillo es inmediato; y eso que el abogado no habla, inicialmente, de la plataforma unitaria que trata de montar. Carrillo sigue preocupado por el futuro.

—«Los comunistas estamos hartos de recibir bofetadas. O encontramos una salida política con la burguesía, o tendremos que prepararnos para no ir como reses al matadero.»

Casi simultáneamente es contactado Alejandro Rojas Marcos, un sevillano que es el alma de un grupo llamado Alianza Socialista Andaluza, embrión de lo que más tarde será Partido Socialista de Andalucía y luego Partido Andalucista. Era un hombre perteneciente a una adinerada familia andaluza que, a través de un reducido núcleo de profesionales, se había presentado a concejal por Sevilla en las elecciones municipales de 1966; eran momentos en los que el «entrismo», para derribar el Régimen, estaba mal visto entre socialistas y demócratacristianos, pero no tanto por los comunistas, que presentaron una candidatura de Comisiones Obreras en aquellas elecciones por la capital hispalense, encabezada por Francisco León Temblador.

La «aventura municipal» de Rojas acabaría con un procesamiento por propaganda ilegal, del que sale absuelto, y con su dimisión del cargo de concejal. Un posterior procesamiento, por las mismas razones, le supondría una condena de dos años de prisión que, al ser recurrida, se convirtieron en tres años de destierro. Corría el año 1972, y Rojas no volvería a pisar Sevilla, su ciudad natal, hasta después de la muerte del dictador.

Por aquel entonces, en una huerta de Mairena del Alcor, se crea la Alianza Socialista Andaluza, con el propio Rojas, Luis Uruñuela, Ángel Tarancón, Juan Carlos Aguilar, Rafael Illescas, Fermín Rodríguez Sañudo y Guillermo Jiménez. Pocas semanas después, Rojas Marcos llevaría los estatutos de ASA a su antiguo compañero de la Facultad de Derecho, Felipe González. Éste se limita a hojear el texto que le muestra Rojas; luego le dice fríamente: «Ah, pero, ¿vosotros sois socialistas?» Ahí se per-

dió una nueva oportunidad de aproximación entre ambos personajes, tan cercanos y tan distantes por múltiples razones.

Rojas acepta de inmediato la propuesta que le hace Trevijano, no sin antes preguntar si el PSOE, partido con el que ASA se encuentra en la Mesa Democrática Andaluza, estará también en el proyecto; es una de sus viejas obsesiones, derivada de una relación de competitividad con González. Se le dice que el PSOE aún no ha sido tocado.

La presencia en la capital francesa de Andreu i Abelló, de Rojas Marcos y de Trevijano, en marzo, es aprovechada por este último para montar una primera reunión informal de lo que meses más tarde se conocería como Junta Democrática. Para llegar a este primer encuentro «plenario» había que vencer primero un obstáculo: la negativa de Calvo Serer a encontrarse con Carrillo.

A través del empresario Teodulfo Lagunero, enlace del secretario general del PCE con los mundos que a él le resultaban inaccesibles, Carrillo había intentado varias veces encontrarse con el ex presidente del ya dinamitado «Madrid». Pero el profesor del Opus Dei había rechazado continuamente esta invitación.

Trevijano decidió acabar de golpe con este inconveniente; invitó a Calvo Serer a mantener una reunión «con varios amigos, que están en el proyecto». El encuentro debía celebrarse en el propio hotel „Lotti“, lugar de residencia de Calvo Serer y donde tantas sesiones de la Junta Democrática debían celebrarse en el futuro. Evidentemente, entre los «varios amigos» se encontraba un Carrillo sonriente, que tendía una mano amistosa a Calvo.

Hablaron como si se conociesen de toda la vida. Calvo Serer, ganado por el encanto que supo desplegar Carrillo, llegaría a afirmar que «el Opus y el PCE tienen muchas cosas en común: la renuncia a tantas cosas, el sentido de la autodisciplina...». Andreu, Rojas Marcos y Trevijano asistían divertidos a la escena. Calvo impuso secreto total.

—«Que nadie llegue a enterarse de que estoy en tratos con el PCE.»

Para aumentar el clima de conspiración, Trevijano propone un sistema de comunicación clandestina: en adelante, en llamadas telefónicas y escritos, Carrillo sería conocido por la letra «A». Calvo recibió la letra «B», Andreu la «C», Trevijano se atribuyó la «D», Rojas Marcos la «E»... El sistema no llegaría a emplearse jamás.

De regreso a Madrid, Trevijano acelera las cosas: en un solo día se entrevista con José María Gil-Robles, Joaquín Ruiz-Giménez, Enrique Tierno y Pablo Castellano. El viejo líder de la CEDA, aun mostrándose de acuerdo en algunos puntos —como la restauración de los estatutos

vasco y catalán—, rechazó de forma tajante un pacto que incluyese a los comunistas. Ruiz-Giménez se mostró más proclive a un entendimiento que alcanzase al PCE, pero se excusa aludiendo al compromiso de su Izquierda Democrática con los restantes partidos del Equipo español de la Democracia Cristiana.

Enrique Tierno acepta encantado la idea. No sólo acepta, sino que, olvidando acaso la vieja e inamovible fidelidad que le profesa Raúl Morodo, ofrece a Trevijano la secretaría general del Partido Socialista del Interior. Naturalmente, Trevijano la rechaza. Para el viejo profesor sería la clandestina letra «G» por la que le distinguirían los dirigentes de la Junta Democrática. El príncipe Carlos Hugo de Borbón Parma se quedó con la «F», pese a los titubeos de los carlistas a la hora de entrar en la Junta.

Las conversaciones con el PSOE, en cambio, no iban a ser tan sencillas. Pablo Castellano, con quien Trevijano mantiene una vieja relación a través del Colegio de Abogados, confiesa a su interlocutor que el PSOE se encuentra ya embarcado en una operación distinta, en la que el socio principal no es otro que José María Gil-Robles. En efecto, desde hacía algunos meses, se venían manteniendo contactos entre los socialistas adversos a Llopi —especialmente Castellano y Enrique Múgica— y el Equipo español de la Democracia Cristiana, contactos tendentes a «preparar el futuro». En la mente de democristianos y socialistas, o al menos de algunos de ellos, parecía latir ya la idea de un futuro «reparto» del electorado en torno a dos opciones, de derecha moderada una, de izquierda moderada la otra. No se olvide que Castellano pasa, en aquellos momentos, por ser el «ala derechista» del PSOE, etiqueta que le causa no pocos problemas en el interior de su partido.

Pero Trevijano comprende que contar con el PSOE es algo muy importante para que el proyecto que alberga llegue a buen puerto. Así que pide a su amigo Lasarte que contacte en Bilbao con Nicolás Redondo. Al líder de UGT la idea le parece buena, pero acaba de salir de la cárcel y carece de pasaporte; no podrá, por tanto, asistir a las reuniones de los dirigentes que, forzosamente, deben celebrarse en París. Al menos, tal es el pretexto.

Trevijano decide ensayar una tercera vía. Le han hablado de un joven abogado laboralista, a quien en medios de la clandestinidad aún llaman *Isidoro* pero que todos saben que responde al verdadero nombre de Felipe González. Trevijano no lo conoce personalmente, y pide a Alejandro Rojas Marcos que concierte una cita con él. Así se hace y, a mediados de mayo, González y Trevijano se encuentran en el parador de Antequera. A Felipe le interesa saber si es cierto que Joaquín Garrigues y

empresarios de la talla de los Huarte están en la operación. «Sí», dice Trevijano, quien no sólo ha hablado ya con los citados, sino con otros: José Joaquín Díaz de Aguilar, Valentín Paz Andrade... «Pues me dejas impactado», admite el joven socialista.

González afirma que ve con buenos ojos la idea de constituir una plataforma común de cuantos quieren ver la democracia instalada en España.

—«Pero yo no tengo ninguna influencia en el PSOE; ni siquiera voy a las reuniones de la comisión ejecutiva.»

Algunas semanas después, ambos se encuentran en el aeropuerto de Barajas: Felipe promete asistir a la próxima reunión de la Junta, se declara personalmente convencido de que la idea es buena. Trevijano comunica a sus interlocutores en París que el PSOE, o al menos aquel prometededor dirigente socialista, se muestra de acuerdo, «lo mismo que sus amigos sevillanos». Todos brindan con champán por el buen éxito de las gestiones emprendidas; saben que en el PSOE hay graves problemas internos, pero confían en que el congreso socialista, que parece estar próximo, allane todas las dificultades.

No volverán a tener noticias de los socialistas hasta el mes de octubre, cuando ya la Junta Democrática está formalmente constituida y anunciada. Entonces tienen conocimiento de unas despectivas declaraciones hacia la Junta, pronunciadas por el recién elegido primer secretario del PSOE, en el XIII Congreso del partido celebrado en Suresnes. En aquellos meses transcurridos, algo había hecho que Felipe González cambiase de opinión. Y, por si quedaban dudas, el propio González comunicó de nuevo la negativa a Carrillo en el curso de un primer encuentro entre ambos, celebrado en Burdeos poco después del congreso de Suresnes. De aquella entrevista, en la que ambos se conocen, Carrillo sale diciendo que Felipe es aún peor que Rodolfo Llopis.

También Santiago Carrillo había intentado, por su cuenta y antes de haber sido contactado por Trevijano, llegar a una alianza operativa de la izquierda con el PSOE. Había sido a finales de 1973, en París, concretamente en casa de Leonor Bornau, y teniendo como interlocutor a Enrique Múgica; en aquella ocasión, Carrillo amenazó al socialista vasco con hacer un pacto con la Democracia Cristiana, si no podía hacerlo con el PSOE. Poco imaginaba el líder comunista que, a esas alturas, el PSOE, precisamente a través de Múgica, delineaba ya un acuerdo con el Equipo democristiano.

Las gestiones con los socialistas se extendieron también a Rafael Calvo Serer, quien había mantenido un encuentro en agosto de 1974 con los máximos dirigentes del PNV en el interior, Ajuriaguerra, Arzallus y Mi-

kel Isasi, así como con Nicolás Redondo, Juan Iglesias y Múgica, por el PSOE. En aquel encuentro, celebrado en la sede peneuvista en Anglet, Calvo intentó, en vano, acelerar la incorporación de los dos partidos a la naciente Junta.

La decisión final de rechazar la incorporación a la Junta no fue un tema pacífico en el PSOE. La organización madrileña, apenas dos centenares de personas en el verano del 74, se pronunció mayoritariamente por la entrada en el organismo que acababan de anunciar Carrillo, Calvo Serer y Trevijano en París. Las discusiones entre Enrique del Moral, partidario de entrar en la JD, y José Acosta, contrario, llegarían a adquirir cierta virulencia. Dos meses después, el congreso de Suresnes zanjaría todos los debates. Sin duda, la pugna con el sector «histórico», que acusaba a los jóvenes de «colaboracionistas con el comunismo» tuvo algo que ver con esta negativa a la Junta emanada del XII Congreso socialista.

De acuerdo con los planes iniciales, el anuncio público de la constitución de la Junta no debía hacerse, al menos, hasta finales de aquel año 1974, una vez ultimados todos los detalles de participación en el proyecto y, tal vez, pensaban los promotores de la idea, incluso convencido el Conde de Barcelona de la conveniencia de respaldarla.

Pero el país era un hervidero. El fracaso del espíritu aperturista delineado por Arias Navarro el 12 de febrero era ya patente para todos. Las ejecuciones de Puig Antich y de Heinz Chenz habían provocado una nueva condena internacional del Régimen y el horror de una mayoría de españoles, que veían cómo el franquismo se consumía en sí mismo, incapaz de la más mínima evolución. Posteriormente se había producido el «affaire» Añooveros. En Carmona, el jornalero Miguel Roldán Zafra, que participaba en una marcha pidiendo agua para el pueblo, cayó acribillado por las balas de la policía. Dos jóvenes presuntamente vinculados a ETA mueren tiroteados por las Fuerzas del Orden, en circunstancias dudosas, en Fuenterrabía...

Datos recogidos de la propia prensa del momento revelan que, pese a las declaraciones gubernamentales del 12 de febrero, el balance de la represión en los siete primeros meses de 1974 es abrumador: 142 detenciones «laborales», 315 «políticas», a las que habría que sumar las de un número indeterminado de estudiantes; cotidianos desalojos policiales de fábricas cuyos trabajadores se encontraban en huelga; más de 3.500 despidos por motivos «políticos» (incluyendo paros laborales); unos cuatro millones de pesetas en multas, incluyendo las impuestas a los párrocos de

Llodio, Alcalá de Júcar (Albacete), Valderrobres (Teruel) y Moratalaz por homilías «inconvenientes»; suspensiones de empleo y sueldo a unos cinco mil trabajadores; sanciones a las revistas *Flashman*, *Por Favor*, *Gentleman*, *Cuadernos para el Diálogo*, *Sábado Gráfico*, *Destino*, *Andalán...* Proceso al director de *El Correo de Andalucía* por publicar la homilía de monseñor Añoveros; sumario contra Manuel Jiménez de Parga por dos artículos en *Diario de Barcelona...* La lista sería interminable. El Régimen se defendía atacando a sus adversarios, incluso, en no pocas ocasiones, a sus enemigos imaginarios. Para colmo, el jefe del Alto Estado Mayor, el aperturista teniente general Manuel Díez Alegría, es cesado por un motivo nimio.

Sin embargo, no es este cúmulo de acontecimientos lo que acelera el nacimiento de la Junta Democrática de España. El 25 de abril, Lisboa amanece tomada por los tanques. Se acaba de producir una de las más insólitas revoluciones en la Historia del mundo, y el hecho sacude a la oposición española, como sacude también al Régimen.

Para colmo, a comienzos de julio Franco cae enfermo con una grave tromboflebitis. El Príncipe Juan Carlos es designado Jefe del Estado en funciones. Todo se acelera. Los conjurados en París creen que hay que darse prisa.

El 29 de julio nace, simultáneamente en París y Madrid, la Junta Democrática de España. El día anterior, a Tierno se le había ocurrido la idea de llamar «Junta» al organismo que iba a salir a la luz, probablemente acordándose de las juntas revolucionarias del año 1919. Trevijano prefería el término «Coordinadora Democrática», pero el nombre era fuertemente objetado por Carrillo. Así se acabó conviniendo en que la instancia unitaria que nacía sería llamada Junta Democrática de España. Las dos últimas palabras fueron añadidas a instancias de Rafael Calvo.

Había sido el propio García Trevijano quien, la noche anterior a la presentación formal, había redactado la «Declaración a los pueblos de España», que, naturalmente, no apareció en la prensa española. «La Junta Democrática asume desde ahora, bajo la actual dictadura o bajo el sistema transitorio que la sustituya, la responsabilidad de vigilar, coordinar, impulsar, promover y garantizar el proceso constituyente de la democracia política en España.» En el texto se propugnaba la formación de un Gobierno provisional, la amnistía política, legalización de todos los partidos sin exclusiones, libertad sindical, derechos de huelga, reunión y manifestación pacífica, libertad de prensa, independencia judicial, neutralidad política para las Fuerzas Armadas, separación de Iglesia y Estado... El punto 9 de esta declaración de principios pedía «el reconocimiento, bajo la

El día en que pudo cambiar la historia

Los titubeos del Conde de Barcelona. García Trevijano rompe con Sáinz Rodríguez. ¿Un invento de Conesa? La cena de Aravaca. Calvo Serer, «relaciones públicas» de la Junta. La reunión de Bruselas. Detenciones en la calle Segre. Lola Flores, subversiva. Nace la Plataforma de Convergencia Democrática.

Aquel 22 de junio, Lisboa era un hervidero de rumores. Los escasos corresponsales de prensa españoles que testimoniaban diariamente a sus periódicos el desarrollo de la Revolución de los claveles pudieron percibir claramente un inusitado nerviosismo entre los miembros de la Embajada. No era solamente el embajador, Antonio Poch, ni el primer secretario, Eloy Ibáñez; también podía notarse una extraña agitación en José Luis Herrero Tejedor, agregado de prensa. Ellos «sabían» que algo iba a ocurrir en los próximos días en la capital portuguesa. Algo directamente relacionado con España.

No resultaba extraño que en los medios oficiales españoles se conociesen las actividades preparatorias de lo que más tarde sería llamado Junta Democrática. Informaciones posteriores emanadas de integrantes del Gobierno Arias Navarro dejan entender que, al menos, uno de los dirigentes de la Junta mantenía excelentes relaciones «de comunicación» con el poder franquista; eran momentos, en todo caso, de gran permeabilidad.

Era lógico, por tanto, que el Régimen intuyese, a través de las incompletas informaciones que le iban llegando, que algo se fraguaba en torno a la fecha del 24 de junio, onomástica de Don Juan de Borbón. Era ésta una fecha en la que el hijo de Alfonso XIII recibía tradicionalmente a algunos amigos venidos de Madrid —entre ellos, obviamente, no pocos dedicados a un activismo político pro-monárquico— en los jardines de Villa Giral-

da. Aquel año de 1974 las cosas podían agitarse no poco, máxime teniendo en cuenta que la afluencia de políticos españoles a «Villa Giralda» se esperaba que fuera muy superior a lo normal, dada la expectación por conocer de cerca el proceso portugués.

Si había algo que Santiago Carrillo y García Trevijano tenían claro era la conveniencia de que el Conde de Barcelona hiciese, de alguna manera, una declaración más o menos explícita de apoyo a la Junta. No se trataba, obviamente, de que la encabezase —tal pretensión hubiese sido impensable en políticos veteranos—, pero sí de que la respaldase. Sus esperanzas se basaban en que Don Juan había aceptado, en conversaciones privadas —pero reproducidas por el diario *Pueblo*—, que la muerte de Carrero Blanco abría una nueva etapa política para España y había dejado entender, de alguna manera, que ponía fin al voluntario período de inactividad iniciado en julio de 1969, cuando su hijo Juan Carlos fue designado sucesor. Incluso acababa de formular unas significativas declaraciones en *L'Express*, en las que casi podía adivinarse un rechazo de la sucesión en la persona de su hijo.

Trevijano había logrado convencer al Conde de Barcelona para que, el 23 de junio, víspera de su onomástica, concediese unas declaraciones a «Le Monde». En ellas se contendría una especie de manifiesto que la Junta Democrática apoyaría públicamente, significando así, de paso, el nacimiento formal de esta plataforma de la oposición. Para ello, Trevijano había hablado ya con Marcel Niedergang y André Fontaine, del rotativo parisino. Ambos recogerían las declaraciones en Lisboa y las publicarían al día siguiente.

En los días anteriores a la festividad de San Juan iban a producirse varios acontecimientos: el menor de ellos, el rechazo del Partido Carlista a participar en la Junta, ante las expectativas de acercamiento de ésta a la figura de Don Juan. Los carlistas, tan cercanos a los comunistas en las «mesas democráticas» y en la llamada «plataforma por la paz», no podían, lógicamente, seguir a Carrillo en esta nueva pirueta, máxime cuando Don Javier estaba a punto de abdicar sus derechos en favor de su hijo Carlos Hugo de Borbón Parma.

El segundo contratiempo era definitivo: cuando ya estaba todo el plan en marcha, con Niedergang y Fontaine comprometidos, Don Juan hace saber, desde Palma de Mallorca, que no efectuará declaraciones para «Le Monde». Trevijano, a quien le comunica telefónicamente esta decisión, se queda de piedra: «No lo acepto», dice simplemente, y parte hacia Palma. Allí conoce que, en conversación con su hijo, quien le pide que no perjudique a la Monarquía, Don Juan ha decidido abandonar los

planes trazados. «Pero estaré en Estoril el día 23», promete el Conde de Barcelona, en un típico movimiento pendular.

Aquel 23 de junio amaneció soleado. Lisboa era toda una pintada, los «comicios» —mítines— se multiplicaban. Jamás se habían visto tantas matrículas de automóviles españoles en la capital portuguesa.

A media mañana se celebraba una importante reunión en el domicilio privado del coronel Lacour, ayudante de Don Juan, en Monte Estoril. En el «hall» esperaban José Joaquín Díaz de Aguilar, Gabriel Navarro, Javier Vidal y Rafael Calvo Serer. Todos ellos viejos y leales partidarios de la causa juanista. Todos ellos estaban perceptiblemente nerviosos ante lo que pudiese estar ocurriendo en el piso de arriba, en un pequeño saloncito. Allí, Trevijano trataba de convencer a Don Juan para que aceptase las declaraciones a Niedergang y difundir un manifiesto que inmediatamente harían público el propio *Le Monde* y *Le Figaro*, a través de su especialista en temas españoles, Jacques Guillaume-Brulon, un hombre que había sido expulsado de España por Fraga cuando éste era ministro de Información. «Ahí abajo están sus amigos, los que siempre dicen que hay que trabajar por la Monarquía de Don Juan. Si no quiere ser Rey, no tiene, señor, derecho a alentar las esperanzas de sus partidarios.» Con estas palabras, pronunciadas cuando ya concluían su encuentro, y casi en el rellano de la escalera, Trevijano y Don Juan iniciaban su ruptura.

A continuación, todos se congregan en torno al Conde de Barcelona.

—«Señor, ¿quiere o no quiere ser Rey de España?», le espeta Trevijano.

—«Sí quiero.»

—«Entonces, ¿por qué no hace las declaraciones?»

—«Porque no es el momento oportuno.»

—«¿No será por su hijo?»

Don Juan hace un gesto ambiguo, dice algo casi ininteligible en francés. Se muestra desmoralizado, cansado, como decepcionado consigo mismo. Sus fieles aprovechan para rogarle —alguno de los presentes se emociona hasta las lágrimas— que dé un paso que, piensan, puede cambiar el porvenir de la Patria. Ante la insistencia, el Conde de Barcelona termina citando a Trevijano para el día siguiente, en «Villa Giralda»: «Allí estará Pedro Sáinz Rodríguez; si le convences a él, yo haré las declaraciones.»

Aquella noche, nuevas presiones iban a pesar sobre el ánimo de Don Juan de Borbón y Battenberg. El periodista Luis María Ansón, que había actuado como portavoz oficioso de su Casa, telefonea desde Madrid, ho-

rorizado: había sabido que él, el hijo de Alfonso XIII, estaba a punto de hacer «unas declaraciones a favor del PCE»; ante eso, él, Luis María Ansón, corría a Lisboa, tratando de impedir aquel error «que tanto daño podía hacer a la Institución».

Al día siguiente, cenan, en un restaurante de las afueras de Estoril, Don Juan y Sáinz Rodríguez con García Trevijano y el empresario Javier Vidal. Trevijano había exigido la presencia de este último como testigo. Sáinz Rodríguez apenas deja hablar a nadie, sugiere que Trevijano, republicano de fondo, pretende destruir la posibilidad monárquica para España. En un momento dado, insinúa que tiene el medio de hacer a Don Juan Rey de España. ¿Cómo? «Escribiendo un papel en el momento oportuno», responde Sáinz Rodríguez, misteriosamente. «Eso es una tontería», replica Trevijano, agravando el ya tenso clima que pesa sobre la cena.

Don Juan, conciliador, ofrece «retocar» el discurso que pronunciará a sus partidarios al día siguiente, en lugar de efectuar las declaraciones a «Le Monde». Y pide a Sáinz Rodríguez que lea el borrador del discurso que el propio Sáinz Rodríguez ha redactado: en el texto se hablaba, en un momento dado, del papel de «vigilante» del proceso hacia la democracia que correspondería al Conde de Barcelona.

—«Vigilante, o sea, no protagonista», apostilla Trevijano. «Si el lapsus es consciente, ése es el discurso de un traidor. Si no, es un engaño que se hace, Señor, a sus fieles y partidarios.»

La cena concluye con una fría despedida entre Sáinz Rodríguez y Trevijano y con un abrazo entre este último y Don Juan:

—«A partir de este momento, yo, Señor, empiezo a trabajar por el advenimiento de la República», dice el irascible abogado.

Ni Trevijano ni Calvo Serer estarían presentes cuando, la noche siguiente, se celebró la tradicional cena de San Juan en el hotel Estoril Sol, con asistencia de varias decenas de políticos: Fernando Álvarez de Miranda, Antonio Fontán, Fernando Chueca Goitia, Jaime Cortezo, Raúl Morodo, Jaime Miralles, Joaquín Satrústegui, Carlos Ollero... Pero tampoco están José María Pemán, ni Sáinz Rodríguez, ni Ansón. Cualquier observador informado podría advertir el pequeño cisma que se había consumado en torno a la figura de Don Juan de Borbón. Las palabras pronunciadas por el homenajeador no respondieron a las expectativas de muchos.

—«Creo que merezco un poco de confianza, incluso en mis silencios», pide el jefe de la Casa Real española.

Poco más de una semana después, el 9 de julio, Franco era internado en el hospital madrileño que llevaba su nombre, aquejado de una grave tromboflebitis. Aún se produciría algún desesperado intento más por par-

te de los promotores de la Junta para lograr un acercamiento de Don Juan. Hubo incluso un intento de entrevista en la Costa Azul, coincidiendo con un rocambolesco rumor de atentado por parte de ETA contra el Conde de Barcelona, algo que nunca pudo comprobarse si era realmente cierto o un invento más del comisario Roberto Conesa, encargado del caso. Finalmente, y ante los reiterados fracasos —el propio José Luis de Vilallonga llegó a intervenir ante el Conde de Barcelona— se decide la táctica de la huida hacia adelante: la Junta salía a la luz el 29 de julio. Inmediatamente se pondría en marcha el proceso de constitución de «juntas democráticas» por toda España.

Nueva dificultad: Carrillo se oponía a la creación de estas juntas locales y sectoriales. En la concepción del líder del PCE, éstas supondrían una merma para el poder de los partidos y concederían singular relieve, por el contrario, a los independientes incluidos en la JD. Pero, por otro lado, Trevijano se había lanzado ya a la creación de estas juntas en numerosos lugares; para ello, alquilaba avionetas, simulando que estaba aprendiendo a volar, se desplazaba a determinada provincia, y regresaba a toda prisa a su punto de destino. Lo haría al menos diez veces antes de que los comunistas descubriesen qué estaba sucediendo. Finalmente, las divergencias con Carrillo se resolvieron con una votación, en la que solamente el PSUC y CC. OO. apoyaron las tesis del secretario general del PCE.

Hasta José María de Areilza había sugerido, a través de Antonio Senillosa, una aproximación a la Junta Democrática. Naturalmente, se le había respondido que en aquel organismo no se podría permanecer como observador; se estaba dentro o se estaba fuera. Pero la petición de Areilza constituía una muestra más, en aquel verano de 1974, del clima de contactos acelerados entre moderados y radicales unidos por un anhelo común: preparar un futuro no traumático para el inminente posfranquismo. Porque todos intuían que aquel octogenario recluido en el hospital que llevaba su nombre, pese a la aparente mejoría que, según las noticias oficiales, experimentaba su salud, no viviría mucho más tiempo.

Por ello, cualquier novedad que significase un paso hacia el incierto futuro causaba un enorme impacto sobre la opinión pública. Así ocurrió con la Junta Democrática, pese a las estrictas normas de censura impuestas por el ministro de Información, León Herrera Esteban: «Parece oportuno evitar en lo posible la difusión de las actividades que llevan a cabo organizaciones políticas españolas declaradas fuera de la ley, así como las declaraciones de sus dirigentes», decía una nota hecha llegar por el Ministerio a los directores de los medios de comunicación. «No se trata —continuaba la nota, con evidente cinismo—, de impedir en manera

alguna, o de limitar el derecho de información, sino de acudir al sentido de la responsabilidad de los directores de los periódicos a fin de que no se publiquen noticias cuya difusión exclusivamente conviene a los intereses de aquellas entidades prohibidas.» La no observancia de este «sentido de la responsabilidad» haría que, en los meses subsiguientes, la prensa recibiese un volumen de sanciones sin precedentes. Fue una época de terror informativo en la que, por citar tan sólo un ejemplo aislado, el humorista Peridis se veía obligado a borrar el clavo con el que remataba el bastón en el que se apoyaba su versión de la caricatura de José Antonio Girón; había que extremar la prudencia...

Esta misma ansiedad por descifrar el futuro hizo que la prensa concediese enorme atención a la cena que, a comienzos de julio, ofreció en su casa de Aravaca Joaquín Garrigues Walker. Garrigues había abandonado formalmente sus negocios para dedicarse de lleno a la política a través de la sociedad Libra: todos le auguraban un gran futuro, todos adivinaban fuerzas importantes —no sólo ligadas al Partido Demócrata norteamericano— tras él. Aquella cena resumía un tanto el espíritu de la época: junto a gentes próximas al Régimen, pero aperturistas, como el subsecretario y *Tácito* Marcelino Oreja, hasta el comunista Ramón Tamames, pasando por Álvarez de Miranda, Donato Fuejo (del PSI), Manuel Jiménez de Parga, Antonio Fontán, Ignacio Camuñas, José Mario Armero... todos acudieron a aquella cena, que algún periodista bautizó como «el espíritu de Aravaca».

Jamás existió tal espíritu, ni aquellas gentes congregadas en los jardines de Garrigues podrían haber llegado jamás a pacto duradero alguno, por más que la composición de la Junta Democrática demostrase poco después que el entendimiento entre la derecha aperturista y la izquierda era posible. La cena de Aravaca quedaría simplemente en eso: una cena.

Pronto se registraron nuevas incorporaciones a la Junta: el Partido Carlista se sumó inmediatamente después de haberse conocido la negativa de Don Juan a respaldar el programa. Y, al poco, el Partido Comunista de España Internacional, rápidamente rebautizado como Partido del Trabajo de España (en parte, por la exigencia del PCE para que así se hiciese si querían entrar en la misma plataforma que ellos), «saludaba» la formación de la Junta Democrática y se postulaba para entrar a formar parte de ella.

Creado a mediados de los años sesenta a raíz de una escisión por la izquierda en el PSUC, el PTE tenía orígenes y límites imprecisos: prácti-

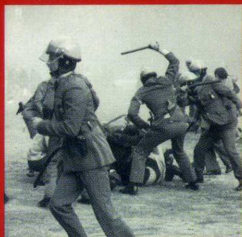
camente nada se sabía ya de sus fundadores originarios, por lo que se consideraba que el PCI (o PTE) había nacido realmente en el congreso fundacional celebrado clandestinamente en Madrid, en un chalet alquilado en la zona de Ciudad Lineal. El congreso, al que asistieron unas cuarenta personas, que pasaron cuatro días viviendo en situación de total reclusión, tuvo lugar a finales de marzo de 1973, y en él se consagró el «grupo de Andalucía» como nuevo equipo dirigente del partido. Al frente de este grupo, y como secretario general, figuraría en adelante un aparejador, ex dirigente de CC. OO. de la construcción en Andalucía, llamado Eladio García Castro/*Ramón Lobato*. Junto a él, ocupan los máximos cargos de responsabilidad en el partido Nazario Aguado/*Valentín*, Manuel Armentta y Joaquín Aramburu, hijo del general Aramburu Topete.

Aunque escasos, sus militantes tenían fama de constantes y de disciplinados hasta lo ridículo: los «hombres públicos» del PTE serían obligados a vestir corbata y a contraer matrimonio si convivían con alguien de otro sexo. Los virajes políticos del PTE llegarían a ser espectaculares: nadie olvidaba, por ejemplo, determinados ataques de *Ramón Lobato* en el órgano oficial «Mundo Obrero Rojo» (luego se transformaría en «El Correo del Pueblo») a la Junta Democrática... Justamente dos semanas antes de ingresar en ella.

La entrada del PTE en la Junta no se haría sin tensiones, lo mismo que antes había ocurrido con los carlistas (quienes, en cualquier caso, abandonarían este organismo en la primavera de 1975, disgustados por el «personalismo» con que García Trevijano llevaba las cosas). El PCE se oponía a cualquier aproximación de «otro» partido que se llamase comunista. Durante una entrevista celebrada a finales del verano de 1974, en París, Santiago Carrillo sugirió a García Castro y Aguado que la mejor medida a tomar sería que los militantes del PCe (i) ingresasen sin más en el PCE. Ello no pudo ser, pero obtuvo, al menos, el cambio de nombre y una promesa de no hostigamiento frontal. La modificación en la denominación del partido era algo que, en todo caso, había sido ya estudiado por el PCI en las sesiones del congreso de 1973, entendiendo que tanto el término «comunista» como el de «internacional» no convenían excesivamente a un partido que se reclamaba «pro chino, aunque sin dogmatismos».

Paralelamente, también el Partido Socialista del Interior, miembro de la Junta Democrática y zigzagueantemente dirigido por Tierno Galván, modifica su nombre por el de Partido Socialista Popular, impuesto por el propio Tierno contra la opinión de Raúl Morodo. La progresiva toma del poder en el PSOE por el grupo joven del interior enfrentado a

CRÓNICA DEL ANTIFRANQUISMO



Crónica del antifranquismo es un auténtico clásico de nuestra historia reciente que Editorial Planeta publica por primera vez en un único tomo. Esta crónica empieza en 1939, cuando termina la guerra civil, y nos lleva hasta el año 1975, punto de partida

de la transición. A lo largo de sus páginas recoge historias protagonizadas por hombres y mujeres capaces de arriesgar sus vidas, su libertad o, simplemente, su porvenir profesional en la lucha por una España mejor.

A través de un relato ameno y vivo, fruto del testimonio de casi dos centenares de personas, *Crónica del antifranquismo* se va convirtiendo, implacablemente, en una «Historia del antifranquismo», o en la antihistoria del régimen anterior. Sus protagonistas han seguido caminos diversos: algunos murieron en la época por causas distintas (en muchos casos, el régimen franquista no fue ajeno a este final), otros consumieron sus últimos años sin que la democracia lograra devolverles los derechos que les fueron injustamente arrebatados, algunos se alejaron de la política y otros, en cambio, llegaron a ocupar cargos destacados en los primeros parlamentos democráticos.

661451



9 788408 074564

 Planeta